




Código debe ser revisado con lupa, dicen expertos

La Familia es más que un matrimonio

Por: Nery García

El siguiente dato de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), demuestra que Nicaragua es un país donde las mujeres son protagonistas y no actrices secundarias: para el 2009, de cada 100 familias, 33 eran encabezadas por mujeres.

Por eso, cuando en mayo reciente se discutía en la Asamblea Nacional el



concepto de familia (artículo 31 del Código de la Familia), se generó una seria discusión pues en el artículo del proyecto de ley, aprobado en lo general, se señala que una familia está compuesta por la unión del matrimonio o unión de hecho y vínculos de parentesco.

A inicios de mayo, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Irma Dávila, dijo a los medios de comunicación que el concepto de familia que se aprobó no sólo constituye a las parejas (hombre y mujer) casadas o en unión de hecho, sino también a las madres solteras y padres solteros que viven con sus hijos.

El artículo 31 quedó establecido, en lo particular, en que la familia está constituida por el matrimonio o unión de hecho estable entre un hombre y una mujer y vínculos de parentesco. Y en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho a preservar, mantener y promover sus propios sistemas de familia.

Dicho Código recalca también sobre la responsabilidad de parte del Estado de proteger la constitución del patrimonio familiar y la igualdad de derechos, deberes y oportunidades en las relaciones del hombre y la mujer, la promoción de la igualdad, la protección del matrimonio y de la unión de hecho estable, así como también atender el interés superior de la niñez y la adolescencia.

Ampliar concepto de familia

Pero las opiniones difieren sobre ese concepto. Para María José Blanco, Trabajadora Social y docente de la Universidad Centroamericana, UCA, el concepto tradicional de familia en la actualidad debe ampliarse y no limitarse a la constitución de un hombre, una mujer y su vínculo de parentesco.

“Nos encontramos con familias actuales donde a veces sólo están los hijos, las abuelitas con los nietos, pero tal vez el núcleo central, el hombre y la mujer que procrearon no están. También hay personas que están considerando vivir en soltería, con su mascota, con sus amigos”, agrega Blanco.

Ampliar el concepto de familia también es un reclamo de organismos por la Diversidad Sexual quienes ven discriminatorio que el Código de Familia precise (en los artículos 47 y 78) que un matrimonio o unión de hecho estable está constituido por un hombre y una mujer.

Martha Villareal, integrante del grupo de Mujeres Lesbianas de Nicaragua Safo, considera que se debe cumplir el principio constitucional de que “todos son iguales ante la ley”. “Igual que las personas heterosexuales tenemos derecho a formar una familia y gozar de los beneficios y la protección del Estado”, reitera.

Jorge López, miembro de la Diversidad Sexual y de la Red de Desarrollo Sostenible, coincide con Villareal en que los prejuicios continúan al no discutirse

la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el Código de Familia, debido a la influencia que ejerce la Iglesia sobre los diputados.

En ese sentido, Auxiliadora Meza, especialista en derecho de familia y una las profesionales que se involucró en el proceso de dictamen de este Código, recuerda que el artículo tres del Código dice que todas las personas tienen derecho a la familia. “Las personas de la diversidad sexual merecen ser reconocidos aun cuando en nuestro país no tenga un asidero legal”, explica Meza.

¿Y los ancianos y las personas con discapacidad?

Los organismos de personas con discapacidad también tienen una lectura crítica de ese Código. Rosa

y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, son principios generales de esa legislación internacional, y de la que Nicaragua es firmante.

Montano, secretaria de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), opina que el Código incluye términos peyorativos que no son congruentes con la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 763) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Se incluye el término ‘incapaces’ o ‘incapacitados’ y tampoco se deja claro qué se entiende por ‘incapacidad jurídica’”, se queja Montano.

La Convención que menciona Montano, en su artículo tres, precisa que la No Discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad y el respeto por la diferencia

También, en el capítulo dos, del libro quinto de “La Personas Adultas Mayores”, se refiere a otras responsabilidades de instituciones no gubernamentales. El papel del Estado, según el artículo 428 es “brindar protección especial a la persona adulta mayor a través de políticas públicas, estrategias y programas en los servicios de seguridad social, salud, educación, vivienda, empleo y servicios sociales personales”.

No obstante, Blanco dice que la forma en que está redactado ese artículo, no deja claro la responsabilidad del Estado al no explicar mecanismos precisos que promuevan esas políticas públicas para el goce pleno de los derechos de los adultos mayores, y se le deja

esa responsabilidad al núcleo de la familia sin que el Estado se obligue de brindarles herramientas necesarias para garantizar su bienestar.

Ante ese escenario en donde todavía existen críticas para mejorar el Código de Familia, Silvio Gutiérrez, director ejecutivo de Fe y Alegría Nicaragua, coincide con Rosa Montano, secretaria de Feconori, y la Trabajadora Social María José Blanco, en que los diputados deben promover más procesos de consulta dada la importancia que tiene esa ley.

Una de esas críticas es que se debe analizar con mayor detenimiento la creación de la Procuraduría Especial de la Familia -- instancia que pretende conocer, opinar y dictaminar en todos los asuntos de familia --, para

b u s c a r

un consenso entre la pertinencia de esa instancia, debido a quienes señalan que sería más importante definir responsabilidades y recursos a organismos existentes.

Sin castigo físico

Hazel Vaughan, coordinadora del Programa Protección Infantil de Save The Children Nicaragua, aplaude la iniciativa del Código de Familia, al recordar que trata de incorporar todas las leyes o normas jurídicas que competen a la familia nicaragüense y en particular en la que promueve y protege los derechos y deberes de la niñez.

Vaughan asegura que las organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, lograron que el Código no incluyera el castigo físico y que se adoptaran otras medidas en donde no se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes.

En específico, el artículo 277 del Código de Familia, dice que los padres o miembros de la familia tienen la responsabilidad de dar orientaciones apropiadas a los niños, niñas y adolescentes, pero “bajo ninguna circunstancias se utilizará el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina”.

En ese mismo artículo delega al Ministerio de la Familia (Mifamilia) para que promueva “formas de disciplina positivas, participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante”.